El uso de robots en las actividades de fiscalización del control externo: el caso de una política pública aplicada a la población vulnerable

Renata RAMOS DE CASTRO

Subprocuradora General del Municipio de Contagem

Doctora en Derecho

Directora de Proyectos del Instituto Protege

Sebastião Helvecio RAMOS DE CASTRO

Vicepresidente de Enseñanza, Investigación y Extensión del Instituto Rui Barbosa

Doctor en Salud Colectiva

Director de Proyectos del Instituto Protege

El artículo analiza el grado de madurez de la Política de Fiscalización Integrada del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais —Política Suricato— y presenta una ruta de auditoría automatizada aplicada al Programa Força Família (Ley Estatal n.º 23.801/2021), identificando 30 089 familias no elegibles entre 1 027 522 inscritas, lo que resultó en un ahorro de R\$ 18 038 000,00, con una precisión del 99,999 %. Se discuten los fundamentos conceptuales, jurídicos y tecnológicos que sustentan la actuación preventiva y automatizada del control externo.

I. El pensamiento de Ramón y Cajal y la importancia de la autonomía intelectual en la construcción institucional

Ramón y Cajal, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1906, no solo revolucionó la neurociencia al proponer la individualidad de las células nerviosas —las neuronas—, sino que también legó un ideario de autonomía, tenacidad y superación intelectual que trasciende los límites de la biología. En su obra *Los tónicos de la voluntad* (1895), Cajal exhorta a los jóvenes científicos a

superar los determinismos impuestos por el origen, los recursos escasos y las estructuras opresivas. Para él, la genialidad es menos un don y más un cultivo —un ejercicio permanente de autodisciplina y de imaginación aplicada.

Esa filosofía del esfuerzo creador, que conjuga libertad y responsabilidad, resuena profundamente cuando se aplica a la urdimbre institucional de las democracias contemporáneas. Las instituciones públicas que se proyectan más allá de la reproducción burocrática y del tutelaje formalista solo se robustecen cuando están alimentadas por núcleos de autonomía intelectual capaces de cuestionar rutinas, proponer innovaciones y, sobre todo, articular conocimiento técnico con compromiso ético.

En el campo del control externo, esta idea se materializa en la actuación de Tribunales de Cuentas que desarrollan capacidades propias de interpretación de la realidad social, adoptan tecnologías de vanguardia para maximizar el interés público y estructuran sus intervenciones con base en evidencias, como lo ejemplifica la Política de Fiscalización Integrada del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais. Instituciones como estas no solo fiscalizan, sino que también transforman —y lo hacen porque cultivan una visión crítica, técnicamente calificada e institucionalmente comprometida con su misión constitucional.

Esa vocación transformadora dialoga directamente con el concepto de «destrucción creadora» desarrollado por Joseph Schumpeter (1942). Según el autor, el progreso económico e institucional no se produce por mera continuidad o preservación del *status quo*, sino mediante procesos disruptivos en los que nuevas formas de organización sustituyen a las anteriores, impulsadas por agentes innovadores. En el contexto del sector público, esa disrupción creativa se da cuando instituciones tradicionalmente conservadoras incorporan tecnologías, reconfiguran sus modos de actuación y asumen un papel inductivo en la formulación y evaluación de políticas públicas, rompiendo con paradigmas de pasividad o conformismo burocrático. La Central Suricato del TCE-MG es, en ese sentido, una expresión institucional de disrupción creativa aplicada a la fiscalización.

Desde la perspectiva del economista Daron Acemoglu, este tipo de arreglo institucional puede interpretarse a la luz del concepto de instituciones inclusivas, aquellas que distribuyen poder, amplían el acceso a la información y favorecen la innovación. En contraposición a las instituciones extractivas —que concentran recursos y excluyen a la sociedad de las decisiones relevantes—, las inclusivas son motores de progreso equitativo y de resiliencia democrática. Acemoglu sostiene que el éxito de una nación depende del fortalecimiento de instituciones que, aun siendo autónomas, estén sometidas a mecanismos sólidos de control democrático.

Los órganos de control externo necesitan una condición esencial: la independencia funcional de sus auditores

Esta tesis se profundiza en la obra *El corredor estrecho* (2019), escrita en coautoría con James A. Robinson, en la cual los autores proponen que el equilibrio entre un Estado fuerte y una sociedad civil activa constituye un camino estrecho, difícil de mantener, pero absolutamente necesario para preservar la libertad. En democracias que aspiran a prosperar, el Estado no puede ser débil —so pena de colapsar— ni opresor —so riesgo de sofocar las libertades. Es en ese espacio de tensión y reciprocidad donde florecen instituciones que, como los Tribunales de Cuentas, deben ejercer su autoridad con vigor, pero también con apertura, responsabilidad y transparencia.

Para recorrer ese corredor estrecho sin sucumbir a la instrumentalización política o al corporativismo inerte, los órganos de control externo necesitan de una condición esencial: la independencia funcional de sus auditores. Este principio está consagrado en las normas de la INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores), particularmente en la ISSAI-P 10 —Declaración de Lima sobre las directrices de la función de auditoría— y en la ISSAI-P 12, que reconoce que la credibilidad de las EFS depende de su independencia organizacional y de sus cuadros técnicos. La independencia garantiza que las auditorías no se dobleguen ante intereses coyunturales, permitiendo evaluaciones objetivas, imparciales y alineadas con el interés colectivo.

En Brasil, este conjunto de directrices encuentra eco en las Normas Brasileñas de Auditoría del Sector Público (NBASP), especialmente en la NBASP 1 y 10, que establecen que los auditores deben estar libres de interferencias externas e internas que comprometan su objetividad, integridad y competencia profesional. La independencia funcional no es un fin en sí misma, sino un instrumento de protección de la calidad democrática del control: garantiza que la auditoría sirva al público, y no al poder; a la ley, y no a la conveniencia.

Por tanto, la autonomía intelectual preconizada por Ramón y Cajal, la destrucción creadora de Schumpeter, el modelo inclusivo y democrático de Acemoglu y los estándares técnicos establecidos por la INTOSAI y las NBASP convergen en una misma dirección: el fortalecimiento de instituciones republicanas dotadas de visión crítica, capacidad técnica y legitimidad democrática, cuyo papel en la construcción de políticas públicas más justas es tan indispensable como silenciosamente transformador.

II. La naturaleza híbrida de los Tribunales de Cuentas en Brasil

La arquitectura institucional de los Tribunales de Cuentas en Brasil refleja una rara hibridez funcional, jurídica y política que no encuentra paralelos exactos en el derecho comparado. La Constitución Federal de 1988 les confirió, de forma inequívoca, competencias tanto de fiscalización como de juzgamiento (art. 71, incisos II y VIII), al tiempo que los ubicó como órganos auxiliares del Poder Legislativo (art. 71, caput), configurando una estructura *sui generis* que no se encuadra ni como órgano jurisdiccional típico, ni como mera agencia de auditoría. Esta ambivalencia ontológica constituye, a la vez, una fuente de complejidad institucional y de potencia transformadora.

La arquitectura institucional de los Tribunales de Cuentas en Brasil refleja una rara hibridez funcional, jurídica y política

Para comprender tal configuración, es preciso recurrir a la tradición histórica de los modelos internacionales de control externo. El llamado modelo de Westminster, de raíz inglesa, se encuentra asociado a la actuación de la *National Audit Office* (NAO), órgano independiente que realiza auditorías en nombre del Parlamento y rinde cuentas directamente al Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes. Se trata de un modelo en el cual el control se ejerce mediante informes técnicos y recomendaciones administrativas, sin poder jurisdiccional. El énfasis recae en la responsabilidad política (*accountability*), siendo el control ejercido *a posteriori*, con foco en la economicidad y la eficiencia del gasto público.

En contraste, el modelo francés, también conocido como modelo d'Orsay, se halla enraizado en la tradición napoleónica y tiene como pilar la jurisdicción contable. La *Cour des Comptes* francesa posee competencia para juzgar las cuentas de los administradores públicos, dictando decisiones con fuerza ejecutoria y pudiendo imponer sanciones financieras. Este modelo presupone la autonomía técnica y funcional del cuerpo de consejeros, que actúa como una verdadera magistratura de cuentas, dotada de independencia equivalente a la del Poder Judicial. En el plano teórico, se trata de un control jurisdiccional de las finanzas públicas, centrado en la legalidad y en la responsabilidad objetiva por los daños al erario.

El modelo brasileño, aunque históricamente influenciado en su formación por los Tribunales de Cuentas de Italia, Bélgica y Francia —especialmente tras la creación del Tribunal de Cuentas de la Unión en 1891, en el albor de la República—, se ha desarrollado conforme a una lógica propia, que incorpora rasgos del modelo inglés (con su función auxiliar del Parlamento) y del francés (con su capacidad sancionadora y de juzgamiento de cuentas). El resultado es un sistema híbrido, que conjuga funciones fiscalizadoras, juzgadoras, consultivas, pedagógicas e inductivas. Esta pluralidad de atribuciones se encuentra en plena expansión, especialmente con la creciente actuación de los Tribunales de Cuentas en la evaluación de políticas públicas, en el uso de tecnologías emergentes y en la promoción de la gobernanza interinstitucional.

El Consejero Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, en su producción académica e institucional, ha sido uno de los más lúcidos intérpretes de esta hibridez. Para él, los Tribunales de Cuentas brasileños no pueden ser reducidos a «auditorías especializadas» ni confundidos con órganos jurisdiccionales plenos. Su papel exige un equilibrio constante entre rigor técnico, sensibilidad social y legitimidad democrática. La hibridez, por tanto, no es un defecto estructural, sino una condición estratégica para la actuación contemporánea de los Tribunales en un ecosistema institucional cada vez más dinámico, interconectado y orientado a resultados.

Esta expansión funcional también se observa en experiencias internacionales. En Estados Unidos, la antigua *General Accounting Office* (GAO) fue rebautizada, en 2004, como *Government Accountability Office*, bajo el liderazgo de David Walker, quien enfatizó la necesidad de reposicionar el organismo como una institución orientada a la rendición de cuentas en sentido amplio —no solo a la verificación contable—. El cambio de nomenclatura no fue meramente simbólico: reflejó una reorientación estratégica, en la cual el control pasó a ser más analítico, prospectivo y enfocado en la efectividad de las políticas públicas.

Es en este contexto de transformaciones globales que surge, en 2022, la *IurisSAI* (*International Organization of Supreme Audit Institutions with Jurisdictional Functions*), creada en Marrakech como resultado de la XXI Asamblea de la INTOSAI. La fundación de la *IurisSAI* representa el reconocimiento formal, en el plano internacional, de la existencia de Entidades Fiscalizadoras Superiores con competencia jurisdiccional, cuyos modelos exigen directrices específicas para garantizar un equilibrio entre independencia funcional y control democrático. La adhesión de Brasil a la *IurisSAI* refuerza la singularidad del modelo nacional y proyecta internacionalmente el debate sobre la judicialización técnica del control externo.

Esta configuración particular permite afirmar que los Tribunales de Cuentas brasileños son órganos esenciales para la democracia, no solo por su función constitucional de fiscalización y juzgamiento, sino por su creciente actuación como garantes del Derecho al Desarrollo, en la acepción consagrada por la Resolución n.º 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1986). Este derecho implica la implementación de políticas públicas que aseguren equidad, participación, transparencia y progreso sostenible —justamente los elementos que los Tribunales de Cuentas, al ejercer el control sobre la ejecución presupuestaria y evaluar los resultados sociales,

están en condiciones de promover y proteger—.

En este sentido, los Tribunales actúan no solo como centinelas de la legalidad, sino como agentes catalizadores de justicia territorial, inclusión social y eficiencia pública, posicionándose como instituciones indispensables para la realización de los derechos fundamentales en su dimensión colectiva y difusa. En una época marcada por incertidumbres, desigualdades y desafíos tecnológicos, esa naturaleza híbrida deja de ser un dilema conceptual para convertirse en una virtud estratégica: la clave para un control externo que sea, a la vez, técnico, legítimo y profundamente comprometido con los valores de la República.

III. La inteligencia artificial aplicada a la fiscalización: el caso del TCE-MG

La incorporación de tecnologías emergentes a la actividad de control externo representa un punto de inflexión decisivo en la forma en que los Tribunales de Cuentas brasileños ejercen sus competencias constitucionales. Entre los pioneros en este proceso se destaca el Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCE-MG), cuya trayectoria de modernización institucional culminó en la creación de la Central Suricato de Fiscalización Integrada, referencia nacional en la aplicación de rutas automatizadas de auditoría, robots de verificación y algoritmos de inteligencia artificial.

Este proceso no ocurrió de forma espontánea. Desde la edición de la Resolución n.º 01/2011, que instituyó formalmente la Política de Fiscalización Integrada, el TCE-MG viene delineando una estrategia de largo plazo orientada a la constitución de un ecosistema de auditoría digital, anclado en evidencias, datos masivos y cruces automatizados. El hito simbólico y operativo de este movimiento fue la inauguración de la sede física de la Central Suricato, el 13 de febrero de 2017, que consagró institucionalmente el cambio de paradigma.

La incorporación de tecnologías emergentes a la actividad de control externo representa un punto de inflexión

La lógica de Suricato está centrada en la construcción de «rutas de auditoría», es decir, algoritmos programados para cruzar bases de datos públicas e identificar, con base en hipótesis previamente definidas, inconsistencias, riesgos o indicios de irregularidades. Este modelo desplaza la auditoría del paradigma reactivo hacia una actuación predictiva y preventiva, permitiendo que el control externo actúe con agilidad, precisión y enfoque en áreas de mayor materialidad social y presupuestaria.

Desde el punto de vista conceptual, cabe destacar que el término «inteligencia» proviene del latín *intus legere*, que significa literalmente «leer hacia adentro», aunque también se asocia a *inter legere*, «elegir entre». Tal etimología revela lo más profundamente humano de la inteligencia: la capacidad de discernir, comparar, interpretar y decidir entre caminos posibles. La inteligencia artificial, por lo tanto, no nace *ex nihilo* —es fruto directo de la inteligencia humana, condensada en lógicas algorítmicas, arquitecturas computacionales y modelos matemáticos que solo cobran sentido a la luz de valores, propósitos y criterios elaborados por personas—.

No existe máquina que piense sin que antes haya pensado el ser humano. La inteligencia artificial

no sustituye el espíritu crítico, el juicio moral ni la prudencia institucional. Pero sí puede —y debe— funcionar como catalizador del conocimiento, instrumento de automatización de procesos rutinarios y factor de aceleración de la inteligencia colectiva, cuando se pone al servicio de objetivos republicanos y se opera con discernimiento técnico y responsabilidad ética. En el control externo, su contribución reside precisamente en liberar a los auditores de tareas repetitivas, permitiéndoles dedicarse al análisis estratégico, al razonamiento inferencial y a la comprensión sistémica de las políticas públicas.

Además de reducir el tiempo y el costo de las fiscalizaciones, el uso de robots e inteligencia artificial incrementa la capacidad analítica institucional, favoreciendo la construcción de diagnósticos más robustos y la inducción de políticas públicas basadas en datos. Este enfoque está alineado con los principios promovidos por la INTOSAI, especialmente en el ámbito de la ISSAI 300 (Auditoría de Desempeño) y de la ISSAI 100 (Principios Fundamentales de la Auditoría en el Sector Público), que enfatizan la relevancia, el riesgo y la materialidad como criterios estructurantes de la auditoría contemporánea.

Más recientemente, la propia INTOSAI ha recomendado a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que desarrollen competencias específicas para auditar algoritmos y sistemas automatizados de toma de decisiones, con especial atención a la integridad de los datos, la explicabilidad de los modelos y la protección frente a sesgos. En Brasil, las Normas Brasileñas de Auditoría del Sector Público (NBASP) siguen esta orientación, exigiendo del auditor la capacidad de comprender no solo los aspectos formales de la conformidad legal, sino también las repercusiones tecnológicas y sociales de las políticas públicas bajo análisis.

En el caso del TCE-MG, la aplicación concreta de esta inteligencia institucional se ha reflejado en fiscalizaciones complejas de programas de asistencia social, educación, salud e infraestructura, con resultados expresivos en términos de economicidad, corrección de desvíos y aumento de la transparencia. Como se detallará en el siguiente apartado, el control del Programa Força Família, instituido por la Ley Estatal n.º 23.801/2021, constituye un ejemplo emblemático de cómo el uso de inteligencia artificial, combinado con la actuación oportuna del control externo, puede traducirse en eficiencia fiscal, equidad social y fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones democráticas.

El Proyecto Suricato, por lo tanto, representa algo más que una innovación tecnológica: es la expresión material de una transformación institucional basada en la disrupción creativa, en la autonomía intelectual de los auditores, en la inteligencia colectiva construida en red y en la comprometida defensa del interés público en su acepción más amplia —la de garantizar que el presupuesto público cumpla, con justicia y eficacia, su función de promover el desarrollo humano—.

IV. El control externo del Auxilio Emergencial Mineiro (Ley Estatal n.º 23.801/2021)

En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Estado de Minas Gerais adoptó medidas de emergencia para mitigar los efectos sociales de la crisis sanitaria, económica y humanitaria que afectó gravemente a las poblaciones más vulnerables. Una de las principales respuestas institucionales fue la creación del Programa Força Família, instituido por la Ley Estatal n.º 23.801, de 21 de mayo de 2021, y reglamentado por el Decreto del 14 de junio del mismo año, con el objetivo de ofrecer ayuda financiera directa a familias en situación de extrema pobreza.

La política pública fue diseñada con criterios objetivos de elegibilidad, tomando como base de

referencia el Cadastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CADÚNICO). Para ser considerada apta al beneficio, la familia debía:

- Estar inscrita en el CADÚNICO hasta el 22 de mayo de 2021.
- Poseer una renta familiar per cápita de hasta R\$ 89,00 mensuales.

Estos criterios, aunque jurídicamente definidos, dependían de un sistema complejo de bases de datos para su verificación. De ahí la importancia decisiva de la actuación preventiva del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCE-MG), que movilizó su Central Suricato de Fiscalización Integrada para aplicar rutas de auditoría automatizadas antes de la efectivación de los pagos. Esta acción no solo potenció la efectividad del gasto público, sino que también evitó desvíos e inequidades en el acceso a la política pública.

La fiscalización se estructuró a partir del cruce de tres grandes bases de datos:

- El CADÚNICO, para la identificación de los inscritos y el análisis de renta.
- El SISOBÍ (Sistema Informatizado de Control de Óbitos), para la identificación de fallecimientos de responsables familiares o miembros del núcleo familiar.
- El CAPMG (Catastro de Agentes Públicos del Estado y de los Municipios de Minas Gerais), para verificar vínculos formales de servidores públicos con las familias beneficiarias.

A partir de esta red de datos, se formularon cuatro hipótesis críticas de inconsistencia, utilizadas como filtros automatizados en las rutas de auditoría:

1. Familias con renta per cápita superior al valor legal estipulado (R\$ 89,00).
2. Familias cuyo responsable financiero había fallecido.
3. Familias en las que todos los miembros estaban registrados como fallecidos.
4. Familias con duplicidad de CPF del responsable financiero en el CADÚNICO.

La aplicación de estas rutas, combinada con la capacidad predictiva de la Central Suricato, permitió identificar, antes de la ejecución de los pagos, un total de 30.089 familias que no cumplían con los criterios legales de elegibilidad, entre las 1.027.522 inscritas en el programa. La distribución de las inconsistencias fue la siguiente:

- 23.500 familias con renta superior al techo legal.
- 6.548 familias cuyo responsable financiero había fallecido.
- 36 familias en las que todos los miembros habían fallecido.
- 5 familias con duplicidad de CPF en el registro.

La tecnología, aliada a la independencia del control externo, puede concretar principios constitucionales y generar justicia social a escala sistémica

La actuación ágil y precisa del TCE-MG fue formalizada mediante comunicación oficial a la Contraloría General del Estado de Minas Gerais, con fecha del 8 de octubre de 2021, es decir, anterior a la ejecución de los pagos. La CGE acogió íntegramente las orientaciones del control externo, lo que resultó en la cancelación de los beneficios indebidos y generó un ahorro inmediato de R\$ 18.038.400,00 a las arcas públicas.

La tasa de falsos positivos —es decir, familias incluidas erróneamente en el filtro automatizado— fue ínfima: solo 25 casos, representando una precisión del 99,999 %. Este resultado evidencia no solo la robustez técnica de las rutas de auditoría, sino también el papel de la inteligencia artificial como instrumento de precisión, justicia y racionalidad en la ejecución de políticas públicas.

Desde la perspectiva jurídica, la actuación del TCE-MG estuvo plenamente respaldada por el art. 27, § 4.º, de la Ley Estatal n.º 23.801/2021, que establece:

«El pago del beneficio Força Família, si aún no ha sido efectuado, será cancelado cuando se constate el incumplimiento de algún requisito de concesión previsto en esta Ley».

Se trata, por tanto, de una fiscalización preventiva, orientada por datos, que respetó los límites legales, evitó daño al erario y reforzó el valor público de la política social en cuestión. El caso de Força Família demuestra cómo los Tribunales de Cuentas, valiéndose de estructuras técnicas sofisticadas y metodologías inteligentes, pueden garantizar la realización del Derecho al Desarrollo en su dimensión de inclusión, eficiencia distributiva y responsabilidad fiscal.

Más allá de proteger los recursos públicos, la actuación del TCE-MG protegió el propio sentido de la política social, preservando su público objetivo y garantizando que los recursos públicos fueran destinados a quienes realmente los necesitaban. Se trata, por tanto, de un caso ejemplar de cómo la tecnología, aliada a la independencia del control externo, puede concretar principios constitucionales y generar justicia social a escala sistémica.

V. Conclusión: innovación, legitimidad e inteligencia institucional

Los caminos recorridos en este artículo conducen a una constatación que es, al mismo tiempo, teórica y empírica: los Tribunales de Cuentas son instituciones estructurantes de la democracia contemporánea, no solo por lo que fiscalizan o juzgan, sino por lo que representan como núcleos de inteligencia pública, guardianes del interés colectivo y vectores del Derecho al Desarrollo.

La experiencia del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais, especialmente a través de la Central Suricato de Fiscalización Integrada, demuestra que la inteligencia artificial, cuando está orientada por finalidades republicanas, puede actuar como catalizador de la calidad del gasto público, de la efectividad de las políticas sociales y de la credibilidad de las instituciones de control. Pero, como se mostró desde la reflexión inaugural inspirada en Ramón y Cajal, esta inteligencia algorítmica depende, antes que nada, de la inteligencia humana —crítica, autónoma, ética— que la concibe, la dirige y la comprende.

En su etimología clásica, *intelligere* significa «elegir entre». Y la elección institucional que se impone a los órganos de control externo en el siglo XXI es clara: o permanecen reactivos, dependientes de metodologías analógicas, distantes del lenguaje de la sociedad y de las transformaciones digitales; o asumen su vocación como instituciones inclusivas, en el sentido propuesto por Daron Acemoglu, actuando con independencia funcional, legitimidad democrática y

audacia innovadora, dentro de lo que el autor denominó el «corredor estrecho» del equilibrio entre autoridad estatal y control social.

La adopción de robots, rutas automatizadas, cruce masivo de datos y auditorías predictivas no sustituye el pensamiento analítico ni prescinde del juicio humano. Al contrario, amplifica su capacidad de intervención racional sobre sistemas complejos, viabilizando un control más oportuno, más justo y más transformador. Se trata, como afirmó Schumpeter, de un proceso de destrucción creativa —en el que las antiguas formas de fiscalización cederán lugar a un nuevo paradigma, basado en el análisis prospectivo, la prevención de riesgos y la inducción de políticas públicas eficientes—.

La fiscalización del Programa Força Família es prueba concreta de ese nuevo paradigma: con base en cuatro hipótesis auditables y tres grandes bases de datos públicas, el TCE-MG impidió, antes de la ejecución presupuestaria, el pago indebido a más de 30 mil familias fuera de los criterios legales, garantizando un ahorro superior a R\$ 18 millones y una precisión superior al 99,999 %. Más que un resultado financiero, se trata de una conquista ética, social e institucional, pues aseguró que los recursos llegaran a quienes realmente los necesitaban, preservando la integridad de la política pública y la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Los órganos de control externo deben estimular, internalizar y difundir innovaciones tecnológicas

Ante ello, es necesario afirmar que los órganos de control externo deben estimular, internalizar y difundir innovaciones tecnológicas, no como fetiche, sino como instrumento crítico de justicia distributiva. Deben preparar a sus cuadros técnicos para auditar algoritmos, interpretar sistemas de decisión automatizados y comprender los efectos sociales de los modelos predictivos, conforme recomiendan las directrices de la INTOSAI y de las NBASP.

Más que vigilantes de la legalidad, los Tribunales de Cuentas pueden —y deben— ser arquitectos de la gobernanza democrática, constructores de puentes entre la técnica y la política, entre la norma y la necesidad, entre el dato y la dignidad humana. Porque, al fin y al cabo, controlar es desarrollar, y desarrollar es garantizar que cada centavo público esté al servicio de la justicia, de la equidad y de la vida.

VI. Referencias Bibliográficas

- Acemoglu, D.; Robinson, J. A. *Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. 3.ª ed. Río de Janeiro: Elsevier, 2018.
- Acemoglu, D.; Robinson, J. A. *El corredor estrecho: Estados, sociedades y el destino de la libertad*. São Paulo: Vestígio, 2021.
- Brasil. *Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988*. Diario Oficial de la Unión, Brasília, DF, 5 oct. 1988.
- Brasil. *Ley n.º 23.801, de 21 de mayo de 2021*. Instituye el Programa Força Família. Diario del

- Brasil. *Decreto de 14 de junio de 2021*. Reglamenta la Ley 23.801/2021. Diario del Ejecutivo – MG, Belo Horizonte, 14 jun. 2021.
- Cajal, S. R. y. *Los tónicos de la voluntad: reglas y consejos sobre la investigación científica*. Madrid: Espasa Calpe, 1895.
- INTOSAI. *ISSAI 100 — Principios fundamentales de la auditoría del sector público*. 2013.
- INTOSAI. *ISSAI 300 — Auditoría de desempeño: principios fundamentales*. 2016.
- INTOSAI. *ISSAI P 10 — Declaración de Lima sobre directrices de la función de auditoría*. 1977.
- INTOSAI. *ISSAI P 12 — El valor y los beneficios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores — marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos*. 2013.
- IURISSAI. *Declaración de Marrakech*. Marrakech, Marruecos, 2022.
- Minas Gerais. *Tribunal de Cuentas del Estado*. Informe técnico de fiscalización del Programa Força Família. Belo Horizonte: TCE-MG, 2021.
- NBASP. *Normas Brasileñas de Auditoría del Sector Público: NBASP 10 — Principios de independencia organizacional y funcional de la auditoría pública*. Brasília: Atricon/TCU/IRB, 2016.
- Schumpeter, J. A. *Capitalismo, socialismo y democracia*. 3.^a ed. Río de Janeiro: Fondo de Cultura, 1961.
- Walker, D. M. *Strategic Plan 2004-2009: Government Accountability Office*. Washington, D.C.: GAO, 2004.